

## VI. LUCHAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Susan Spronk y Philipp Terhorst

En el contexto de las crisis generalizadas de los servicios públicos provocadas por la globalización neoliberal, los movimientos sociales han intentado luchar contra la privatización de servicios básicos como el agua, la electricidad y la atención a la salud, y promover el desarrollo democrático de alternativas públicas y comunitarias (Parliamentary Forum WSF 2006). A diferencia de la literatura sobre gobernanza participativa en los sectores de servicios públicos, que se centra en cómo funcionan las instituciones más que en cómo éstas surgen, este capítulo se centra en el papel de los movimientos sociales en el fomento del desarrollo y la puesta en práctica de ‘alternativas a la privatización’.

El primer apartado repasa algunas de las principales tendencias en la teoría de los movimientos sociales, y plantea que el concepto de “acumulación por desposesión”, acuñado por Harvey (2003), ofrece un marco analítico útil para evaluar los puntos fuertes y las limitaciones de las luchas por unos servicios públicos para todos y todas en los sectores del agua, la electricidad y la salud. El segundo apartado analiza las diferencias de las dinámicas de los movimientos sociales en estos tres sectores, llamando la atención sobre la importancia de sus economías políticas en las percepciones que tienen los movimientos sociales de estos servicios como ‘mercancías’ y sus capacidades para establecer vínculos entre los distintos sectores. El tercer apartado comienza con un análisis de la política de construcción de coaliciones entre las principales organizaciones de movimientos sociales que participan en luchas relacionadas con el suministro de servicios: sindicatos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones comunitarias. A continuación, examina el papel desempeñado por los movimientos sociales en el desarrollo de alternativas a la privatización y explica las posibilidades –y las limitaciones– de influencia de los movimientos sociales en las vías de reforma.

### **Definiciones y enfoques en la teoría de los movimientos sociales**

Teniendo en cuenta que el término ‘movimiento social’ se utiliza para describir fenómenos tan diversos como revoluciones, sectas religiosas, sindicatos y campa-

ñas de consumidores, no es de extrañar que el concepto se resista a una definición exacta. La cuestión se complica aún más por el hecho de que distintas tradiciones hacen hincapié en diferentes aspectos de los movimientos sociales (Armstrong y Bernstein 2008), ya que pertenecen a marcos y conceptos ideológicos del cambio social rivales, que van desde el marxismo al liberalismo. Tal como apunta Jelin: “Los movimientos sociales son objetos construidos por el investigador, que no coinciden necesariamente con la forma empírica de la acción colectiva. Vistos desde fuera, puede que presenten cierto grado de unidad, pero internamente siempre son heterogéneos, diversos” (citada en Egan y Wafer 2004, 2).

Uno de los puntos clave del debate sobre la definición de los movimientos sociales se encuentra en las distintas ideas de los académicos de qué constituye el orden social, así como en las discrepancias sobre qué estrategias y tácticas son las más eficaces para hacer efectivo el cambio social. El debate contemporáneo se ha visto influido por lo que se entiende que es el declive de los movimientos de clase, como los protagonizados por organizaciones obreras, campesinas y socialistas que amenazaron el orden político durante el período de la industrialización naciente, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Según explica Tilly (1978), la primera expansión de los movimientos sociales estaba relacionada con los grandes cambios económicos y políticos que acompañaron al proceso de desarrollo capitalista: la urbanización, la industrialización y la precarización. El proceso de urbanización, que creó grandes ciudades, facilitó la interacción entre un gran número de personas. Del mismo modo, el proceso de industrialización, que concentró a importantes masas de trabajadores en la misma región, fue el responsable de que muchos de aquellos primeros movimientos sociales abordaran problemas que eran importantes para esa clase social, como la falta de servicios básicos (Hamlin 1998). En efecto, los movimientos obreros y socialistas que aparecieron en los centros industriales a fines del siglo XIX fueron considerados como movimientos sociales prototípicos durante la mayor parte del siglo XX, tanto por marxistas como por no marxistas (como Tilly). A partir de los años cincuenta, con el inicio de la desindustrialización, el concepto marxista ortodoxo de revolución –centrado en la idea de que la clase trabajadora industrial organizada era el sujeto histórico privilegiado para propiciar el cambio social revolucionario– fue objeto de crecientes críticas, en paralelo al auge de varias luchas contra la opresión a lo largo del siglo XX que no ponían su principal acento en la relación entre capital y trabajo.

Con las movilizaciones estudiantiles de mayo de 1968 en centros urbanos tan diversos como Ciudad de México y París, comenzó a surgir todo un conjunto de literatura en torno a los ‘nuevos movimientos sociales’ (NMS), que profesaba que las viejas formas de ‘organización de clase’ se habían diluido en el contexto de la sociedad postindustrial, especialmente en la Europa continental (Touraine 1969). A diferencia de los movimientos obreros y socialistas del pasado, los NMS que surgieron a fines de los años sesenta –como el movimiento por los derechos civiles, los movimientos feministas y los movimientos gay– no se centran en la

contradicción entre capital y trabajo, sino en otros tipos de dominación y violencia, como el racismo, el sexismo y la homofobia.

El supuesto giro histórico marcado por la aparición de estos ‘nuevos’ movimientos inspiró la bifurcación de la literatura académica dominante en dos paradigmas teóricos que surgieron en cada uno de los extremos del Atlántico: el ‘enfoque del proceso político’ en la sociología norteamericana y el ‘enfoque de los NMS’ en la Europa continental (Foweraker 1995, Canel 1997). Estas dos escuelas de pensamiento no sólo estaban reaccionando ante acontecimientos históricos, sino también ante las carencias que percibían en distintos conjuntos teóricos para interpretarlos. El enfoque del proceso político, en concreto, surgió como respuesta a teorías anteriores de los movimientos sociales inspiradas por el sociólogo francés Émile Durkheim, que veía la protesta como resultado de las patologías de sus participantes o de la destrucción de las afiliaciones comunitarias en la sociedad de masas. El enfoque de los NMS, en cambio, pretendía superar ciertas formas reduccionistas del marxismo, que asignaba a la clase trabajadora (entendida de manera muy limitada como el proletariado industrial) un lugar privilegiado en el curso de la Historia.

Aunque se ha escrito mucho sobre la superioridad de un enfoque con respecto al otro, las supuestas diferencias teóricas se explican en gran medida porque cada uno de los enfoques examina los movimientos sociales niveles de análisis distintos, pero complementarios. El enfoque del proceso político tiende a centrarse en las manifestaciones públicas, externas, de la actividad de los movimientos sociales (por ejemplo, sus relaciones con el Estado), mientras que el de los NMS tiende a centrarse en procesos internos (por ejemplo, la formación de identidades entre los participantes). Desde los años noventa, se tiende a buscar una confluencia entre los dos enfoques, ya que los investigadores de ambos paradigmas persiguen vincular las consideraciones del análisis de nivel micro del proceso de movilización (el acento de la escuela de los NMS) con el contexto político e institucional de nivel macro (el acento del enfoque del proceso político) (Haber 1996). Este acercamiento ha impulsado a académicos de la escuela del proceso político a integrar consideraciones ‘culturales’ en sus análisis (Rao et al 2000, McAdam et al 2001), mientras que los académicos de la corriente de los NMS han intentado acercar los debates sobre estructura y acción mediante el análisis de redes (Diani y McAdam 2003).

La relevancia de estos dos enfoques para comprender las luchas por los servicios públicos en el Sur Global es, sin embargo, limitada por varios motivos. En primer lugar, ambas escuelas surgieron en un intento por explicar la importancia de los movimientos sociales en sociedades ‘postindustriales’, pero la mayoría de las zonas del Sur Global se encuentran en la periferia o la semiperiferia de la economía capitalista mundial y, por lo tanto, no pueden caracterizarse como ‘industriales’, y aún menos como ‘postindustriales’. En segundo lugar, el enfoque del proceso político se desarrolló a partir de la experiencia de democracias capitalistas y liberales, y sus conceptos no encajan demasiado en los contextos poscoloniales del Sur Global (Cook 1996, Almeida 2003). En tercer lugar, aunque las luchas

de los movimientos sociales por la salud, el agua y la electricidad se identifican en ocasiones como ‘nuevos’ movimientos sociales porque se centran en formas de identidad que no se basan en la clase (Schonwalder 2004), estas luchas no dejan de ser muy materiales en el sentido en que plantean demandas en las esferas de reproducción, que coinciden con las demandas de las clases trabajadoras (Castells 1977, Mainwaring 1987). En cuarto lugar, la literatura sobre nuevos movimientos sociales establece una división entre ‘viejos’ movimientos (léase obreros) y ‘nuevos’ movimientos que se demuestra como falsa con la aparición del sindicalismo de movimiento social (Moody 1997), que ha sido un fenómeno importante en las luchas por los servicios públicos. En quinto lugar, aunque los teóricos de la escuela de los NMS sostienen que uno de los rasgos característicos de estos ‘nuevos’ movimientos es su búsqueda de autonomía con respecto al Estado, la mayoría de movimientos sociales que trabajan sobre los sectores del agua, la electricidad y la salud utiliza un discurso basado en los derechos, que implica plantear exigencias al Estado (Nelson y Dorsey 2007, Dugard 2009).

David Harvey (2003), un geógrafo que ha escrito mucho sobre movimientos sociales, las políticas de la identidad y la crítica de la economía política de Marx, nos ofrece una alternativa para entender las luchas actuales por los servicios básicos en el Sur Global que es sensible a las inquietudes sobre la identidad que esbozan los teóricos de los NMS y, a la vez, presta atención al contexto histórico en que surgen diferentes movimientos sociales. En su trabajo sobre el ‘nuevo imperialismo’, Harvey (2003, 166) nos recuerda los cambios en la formación de clases afectados por el desarrollo capitalista que tuvo lugar durante el siglo XX, afirmando que los tipos de luchas que favorecieron la formación de los sindicatos en momentos históricos de expansión de la producción en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se han visto apropiadas desde entonces por “movimientos insurgentes contra la acumulación por desposesión”. Estas luchas, que se dan fundamentalmente en la esfera de la reproducción –como la lucha de los ogoni de Nigeria contra la Shell o la campaña por un sistema universal de atención a la salud en los Estados Unidos–, no tienen lugar bajo el estandarte de la clase trabajadora o el sindicato, ni bajo un liderazgo de la clase trabajadora que se identifique como tal. En lugar de ello, beben de un amplio abanico de grupos de la sociedad civil que han sido objeto, de una u otra forma, de la desposesión, la marginalización y el empobrecimiento. Dada la amplia gama de intereses sociales que participan en estas luchas, Harvey (2003, 168, 177) propone que éstas constituyen “un conjunto de dinámicas políticas de acción social menos concentradas” que los movimientos socialistas revolucionarios que surgieron en todo el mundo a principios y mediados del siglo XX. Harvey advierte, sin embargo, que entre estos movimientos existe “el peligro de que una política de nostalgia por lo que se ha perdido suplante la búsqueda de formas para satisfacer mejor las necesidades materiales de poblaciones empobrecidas y reprimidas”.

Muchas de las luchas contemporáneas de movimientos sociales por los servicios públicos se pueden caracterizar como luchas contra la acumulación por

desposesión (Bond 2005, McDonald y Ruiters 2005, Spronk y Webber 2007): en ellas participan bases diversas, entre las que estarían los miembros más marginalizados de la sociedad (los ‘pobres’), los profesionales de clase media (ONG) y los trabajadores del sector público; el espacio de organización tiende a ser un territorio, un barrio o la ciudad más que el lugar de trabajo; y están luchando contra formas contemporáneas de cercamiento capitalista, especialmente evidente cuando infraestructuras como hospitales públicos y redes de agua y electricidad construidas durante décadas de traspasan al sector privado con fines de lucro por menos que nada.

Lo más importante, como pone de relieve el trabajo de Harvey, es que las luchas contemporáneas por servicios básicos son un fuerte indicio de los cambios en la formación de clases bajo el neoliberalismo. El papel histórico de los sindicatos como líderes de la lucha de la clase trabajadora ha sido reemplazado por coaliciones de organizaciones de movimientos sociales dominadas por trabajadores informales. En el contexto de Sudáfrica después del *apartheid*, por ejemplo, varios académicos han observado que los tipos de lucha de clase encabezadas en su día por los sindicatos se han transformado en “luchas para la ayuda directa a grupos marginalizados” (Ballard et al 2006, 8). Nash (1994, 10) observa algo parecido en el contexto de los estragos sociales provocados por las políticas de ajuste estructural fomentadas por el Banco Mundial en Bolivia, y señala que la principal preocupación de la población trabajadora al margen del desarrollo capitalista durante la era neoliberal pasó a ser “el derecho a vivir en un mundo con una base de subsistencia menguante” en lugar de una “lucha de clases contra la explotación definida en el espacio de trabajo”. En efecto, en opinión de Olivera (2004, 126), activista sindical y portavoz de la coalición de distintos grupos de la sociedad civil que se creó para luchar contra la privatización del agua en la ciudad boliviana de Cochabamba, en el “nuevo mundo del trabajo” los movimientos sociales se han centrado cada vez más en luchar por las “necesidades básicas de la vida cotidiana” como medio mediante el que expandir la base de la lucha por una mayor transformación social.

Estos movimientos sociales contemporáneos, sin embargo, aún hacen uso de repertorios de movimientos sociales del pasado. Barchiesi (2006, 38) nos recuerda, por ejemplo, que a pesar de que el acento haya cambiado de la producción a la reproducción, la “nueva generación de dinámica política de los movimientos sociales en Sudáfrica” tiene “relaciones organizativas e ideológicas/discursivas con experiencias de larga tradición en la organización de las clases trabajadoras”. Una de las reivindicaciones clave de los movimientos sociales del pasado y del presente es la de la ‘desmercantilización’ de servicios básicos, un término que fue popularizado en la literatura académica por Esping-Andersen (1990). Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado escandinavo del bienestar se expandió porque una serie de alianzas urbanas y rurales, de trabajadores y campesinos, exigió que la elite extendiera la protección social a la clase trabajadora y a los pequeños campesinos con el fin de protegerlos de los caprichos del mercado laboral, espe-

cialmente durante los períodos de recesión, mediante la construcción de una red de protección social de servicios suministrados por el Estado. Durante décadas, estas protecciones sociales asumieron la forma de generosas pensiones, atención a la salud y educación, que se financiaban a través del sistema impositivo y que el Estado proporcionaba sin coste alguno para el usuario directo y que, como en el caso del cuidado de niños y ancianos, apoyan y liberan especialmente a las mujeres. El objetivo de la desmercantilización –retomado por los movimientos sociales contemporáneos– consiste, por lo tanto, en desvincular servicios básicos como el agua, la electricidad y la salud del mercado (Leys 2001), basándose en la premisa de que las decisiones sobre la producción y el suministro de bienes y servicios que toma el mercado están más allá de la esfera del control democrático.

### **Geografías del suministro de servicios y los movimientos sociales**

Durante la era neoliberal, los movimientos sociales que luchan por la desmercantilización de servicios básicos de salud, agua y electricidad han desafiado las políticas de privatización gubernamentales en lugares tan distantes entre sí como Perú, Sudáfrica, Tailandia e India, por citar sólo algunos (McDonald y Ruiters 2005, Arce 2008, Hall 2010), e incluso han contribuido a la transición políticas en países como Bolivia y Uruguay (Santos y Villareal 2006, Spronk 2007). Hay también redes de movimientos sociales *transnacionales* que funcionan en varias regiones, especialmente en los sectores del agua y la salud –por lo que se puede hablar de movimientos *globales* por la salud y el agua–, aunque no en el de la electricidad. En el ámbito local, en cambio, son los mismos grupos los suelen participar en las luchas contra la privatización del agua y la electricidad, mientras que aquellas relacionadas con la salud suelen estar formadas por distintas coaliciones de actores.

¿Por qué destacamos estas diferencias entre movimientos sociales en los tres sectores? Basándonos en el acento que pone Harvey sobre las interconexiones entre desarrollo capitalista, geografía y lucha, proponemos que las principales diferencias entre los sectores se deben a las economías y geografías políticas del suministro de servicios que influyen en las percepciones de los movimientos sociales de estos servicios como mercancías y abren posibilidades para establecer vínculos intersectoriales. En primer lugar, los tres sectores entrañan un alto nivel de inversión pública, aunque el sector eléctrico es el que requiere la mayor intensidad de capital de los tres y conlleva actividades de generación (por ejemplo, represas), transmisión y distribución. Por otro lado, si bien los sistemas de agua y saneamiento urbanos y los centros avanzados de atención a la salud pueden ser tecnológicamente sofisticados, existen también alternativas de bajo coste y ‘caseras’. Como bien atestiguan los cientos de miles de sistemas rudimentarios artesanales en las zonas rurales y periurbanas del Sur Global, el agua es ‘un don de la naturaleza’ que se puede extraer del suelo y distribuirse con tecnología básica. Los servicios de salud también pueden implicar una tecnología de gran intensidad de capital, como pueden ser los equipos médicos de resonancia magnética, pero en la mayoría de los casos la salud pública primaria –en la que se suelen centrar la mayoría de movimientos sociales– exige una atención y prevención básicas, más que el fomento de costosos fármacos y

equipamientos. Esto significa que las relaciones entre los ciudadanos y los servicios eléctricos se han visto siempre mediadas por el capital y/o el Estado, mientras que no sucede lo mismo con los servicios de agua o salud, para los que aún existen alternativas artesanales o tradicionales.

Además, las jerarquías de necesidades humanas facilitan que los dirigentes de movimientos sociales puedan reivindicar que el acceso al agua y la salud es un 'derecho humano', posibilitando así la construcción de movimientos globales, mientras que es menos habitual que las demandas se enmarquen desde este enfoque en el sector eléctrico.<sup>1</sup> El agua no tiene ningún sustituto fisiológico, lo que la convierte en 'la esencia de toda forma de vida'. También tiene una gran importancia cultural, ya que ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la humanidad (Illich 1985). Igualmente, la atención a la salud es algo primordial y, como los distintos significados atribuidos al agua, las percepciones de 'buena salud' tienden a variar según las culturas (Paulson y Bailey 2003). Hay sustitutos para la atención 'moderna' de la salud —como los sistemas 'tradicionales—, pero estos están cada vez más integrados en los sistemas de salud formales, especialmente en el ámbito primario. Muchas personas utilizan más de un tipo de atención a la salud, por lo que es difícil separar las demandas para las distintas opciones. La electricidad, por su parte, es una 'necesidad' de reciente construcción y no es esencial de la misma forma en que lo es el agua y la salud. En lugar de cocinar en una estufa o encender la luz, se puede quemar madera o encender una vela (aunque, por supuesto, puede que estas opciones sean más perjudiciales para el medio ambiente y la salud que la electricidad de un generador o el gas para cocinar). Además, los sustitutos de la electricidad (madera, velas, etcétera) se organizan en el ámbito del hogar y no exigen la organización social de una comunidad del mismo modo que una bomba de agua comunitaria o un sistema de salud tradicional. Esto no quiere decir que no existan numerosas protestas de residentes urbanos que persiguen la conexión a la red eléctrica, sino más bien que es menos probable que esas protestas generen una dinámica de movimiento social que en los casos del agua y la salud. Hasta la fecha, la 'necesidad' de agua y salud ha facilitado la movilización del discurso de los derechos en estos sectores, que está menos presente en el campo de la electricidad. Hay, por ejemplo, redes de incidencia internacionales en torno a los derechos del agua y la salud, pero no de la electricidad (véase Nelson y Dorsey 2007), aunque puede que la movilización internacional en torno al cambio climático cambie este escenario.

En segundo lugar, la geografía del suministro de servicios también lleva a los distintos actores de los movimientos sociales a establecer conexiones entre el agua y la electricidad, mientras que los activistas que defienden los sistemas públicos de atención a la salud tienden a ser un grupo totalmente distinto de personas. Esto se

---

1. Sudáfrica, debido a su historia de privatización tras el apartheid —especialmente las promesas incumplidas sobre la expansión de servicios básicos realizadas por el Gobierno del Congreso Nacional Africano—, parece ser una excepción. Para más información sobre el marco basado en derechos en el sector eléctrico véase Dugard (2009), y a Ruiters (2007) sobre el movimiento de reconexión a los servicios de agua y electricidad desafiando el sistema de contadores de prepago.

explica, en parte, por dos grandes factores. En primer lugar, en tanto que servicios de infraestructura en red, los servicios de agua y electricidad suelen ser suministrados por el mismo nivel de gobierno o por la misma empresa. En el caso de las organizaciones sindicales, por ejemplo, es más probable que los trabajadores de los sectores del agua y la electricidad pertenezcan a la misma confederación sindical. Por otro lado, los servicios de agua y electricidad están sujetos a los mismos tipos de políticas de recuperación de costes debido a que sus estructuras tarifarias de punto de consumo son parecidas. Un buen ejemplo de esta sinergia es el Comité de Crisis de Electricidad de Soweto (SECC), en Sudáfrica, que considera que su tarea principal consiste en “participar en otras luchas sobre el agua (‘Operación Vulamanzi’) y la vivienda (‘Operación Buyel’ekhaya)’; en resumen ‘cuando el Gobierno del CNA [Congreso Nacional Africano] no cumple, debemos cumplir nosotros donde sea posible” (Egan y Wafer 2004, 10). En segundo lugar, los vínculos entre los sectores del agua y la electricidad tienden a ser especialmente fuertes en las comunidades agrícolas habitadas por pequeños campesinos que dependen de la electricidad para bombear el agua de riego. En la región andina de Latinoamérica, por ejemplo, coaliciones de grupos de usuarios –entre los que se encuentran consumidores urbanos y asociaciones campesinas de riego– se han enfrentado al Estado para impedir la privatización de empresas públicas de agua y electricidad, enmarcando la lucha como una defensa del patrimonio nacional (Olivera 2004, Arce 2008).

#### *Movimientos sociales en el sector del agua*

Por lo general, se considera que el ‘movimiento mundial por la justicia del agua’ se compone de una multitud de luchas sociales y políticas a escala local y nacional en todos los continentes, y organizadas en redes transnacionales (Balanyá et al 2005). En su batalla contra las tendencias hacia la privatización, la comercialización y la desregulación, los movimientos por la justicia del agua adquirieron una dimensión global a fines de los años noventa (Hall et al 2005). Actuando en un campo que se caracteriza por el conflicto, la lucha y el desmantelamiento, “activistas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y redes (...) luchan en todo el mundo por la defensa del agua y del territorio, y por el patrimonio común” (International Forum on the Defense of Water 2006, 1).

Algunos analistas liberales, como Morgan (2006, 412), consideran que los movimientos por el agua son fundamentalmente “movimientos de consumidores” que reaccionan contra la participación del sector privado y la gobernanza global neoliberal. Para Morgan, los movimientos del agua son en gran medida disruptivos, y generan “trayectorias paralelas enfrentadas de cambio legislativo y protesta social que en ocasiones confluyen, pero que, por lo general, conviven en una frágil tensión”. Teóricos más radicales, por otro lado, entienden a los movimientos sociales por el agua como fuerzas potencialmente contrahegemónicas que no sólo persiguen el objetivo inmediato de garantizar ‘servicios para todos y todas’, sino que también, en ese proceso, construyen retos para la democracia participativa, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental. En Bolivia y Sudáfrica, dirigen-



tes de movimientos sociales por el agua han articulado una agenda socialista, vinculando las demandas de democratización con la transformación de la sociedad y la economía (Coetzee 2004, Olivera 2004). Aunque el movimiento por la justicia del agua nació como una reacción a las políticas privatizadoras, una de las reivindicaciones clave del movimiento es la democratización de las relaciones sociales y de propiedad en torno al agua, tal como se expresa en el discurso por la defensa del 'patrimonio común' (Bakker 2007, Naidoo y Davidson-Harden 2007).

Según apunta Swyngedouw (2004, 175), "el problema del agua no es una mera cuestión de gestión y tecnología, sino más bien, y quizá en primer lugar, una cuestión de poder social". Es precisamente debido a que los sistemas de agua están integrados en instituciones socio-históricas más amplias conformadas por luchas por los recursos que los movimientos del agua se enfrentan a muchísimos desafíos para cumplir con sus propias aspiraciones de desarrollar y poner en práctica alternativas (Terhorst 2009). A pesar de ello, hay un gran número de campañas exitosas en todos los continentes: las muchas afirmaciones jurídicas y constitucionales del derecho humano al agua que persigue prohibir su privatización, especialmente en América Latina (Mychalejko 2008, Taks 2008, van Schaick 2009); una serie de procesos de reforma fomentados por los movimientos en empresas públicas de agua concebidos para que el agua se mantenga en manos públicas (Balanyá et al 2005); y varias iniciativas para promover partenariados público-públicos (Hall et al 2009). En el terreno de la gobernanza global, el movimiento no sólo ha interrumpido procesos en los Foros Mundiales del Agua y desafiado a los grupos de cabildeo empresariales en el seno de organismos de la ONU, lo cual ha llevado a la inclusión de representantes de movimientos sociales en entes de gobernanza global como la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento del Secretario General de las Naciones Unidas (UNSGAB) y la Alianza Mundial de Partenariados entre Operadores de Agua (GWOPA). Los movimientos por el agua, especialmente ONG internacionales como Council of Canadians, también han desempeñado un papel esencial en la iniciativa que el 28 de julio de 2010 consiguió que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una resolución, presentada por el Gobierno boliviano, a favor del derecho humano al agua y el saneamiento.

#### *Movimientos sociales en el sector de la salud*

Según una reciente publicación sobre la salud bajo el capitalismo (Panitch y Leys 2009), ésta representa un importante campo de la economía política que está determinado por la lucha entre las fuerzas de la comercialización y las fuerzas populares que luchan por que se convierta o siga siendo un servicio público con acceso equitativo para todos y todas. Dado el carácter multidimensional de los determinantes de la salud pública, las organizaciones de movimientos sociales en el sector de la salud tienden a tener objetivos generales, interviniendo en debates sobre cuestiones políticas, económicas y medioambientales, tales como la importancia del acceso al agua, los alimentos y la vivienda, entre muchas otras (Zoller 2006). Como apunta el Informe de la sociedad civil a la Comisión so-

bre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (CSDH 2007, 195), “la búsqueda de la salud por parte de los pueblos es inseparable de fuerzas sociales y políticas injustas, tanto internas como externas”. Al igual que sucede con el agua, las luchas por la salud se utilizan a menudo como un ‘punto de entrada’ de movimientos sociales que persiguen una transformación radical del sistema político y económico.

Aunque hay constancia de movimientos sociales relacionados con cuestiones de salud ya desde la revolución industrial, cuando eran de especial importancia una serie de inquietudes sobre la salud en el trabajo, el grueso de la teoría sobre movimientos sociales se ha aplicado a los movimientos en el ámbito de la salud recientemente. Por ese motivo, el gran abanico de distintos movimientos y sus estrategias, tácticas y enfoques políticos no se han estudiado con suficiente profundidad ni de forma comparativa (Brown y Zavestoski 2004). La atención de los académicos, sobre todo en el Norte, se ha centrado en los movimientos sociales que trabajan sobre la seguridad en el trabajo, el movimiento de salud de las mujeres, el activismo en torno al VIH/SIDA y la organización de la justicia medioambiental, reconociendo su importancia para la historia de la medicina y las políticas de salud. A escala global, Obrinski (2007, 29) apunta que hay una creciente variedad de actores que forman los movimientos sociales por la salud y que están impulsando “cambios clave en el discurso y la práctica de la salud mundial”. Analizando el proceso de la política y la gobernanza mundial en materia de salud, Obrinski llega a la conclusión de que los movimientos sociales por la salud son importantes fuerzas que han redefinido las nociones de salud global en el pasado.

Brown et al (2004) identifican tres tipos de movimientos sociales por la salud y, aunque los tres se pueden encontrar en el Sur Global, los dos primeros tienden a dominar debido al precario suministro de atención primaria de la salud. Los *movimientos por el acceso a la salud* buscan un acceso equitativo a la atención de la salud y una mejora del suministro de sus servicios, a través, por ejemplo, de reformas nacionales para impulsar la atención primaria o ampliar el seguro médico. Los *movimientos por la salud basados en grupos específicos*, como los movimientos por la salud de mujeres, gays o lesbianas, abordan la desigualdad y la inequidad en la salud que se basan en fronteras de división social como la raza, el género o la clase. Los *movimientos por la ‘salud encarnada’* persiguen el tratamiento y/o la investigación de enfermedades o dolencias que no han sido reconocidos hasta la fecha, como el cáncer de pecho debido a la contaminación medioambiental o las enfermedades de los trabajadores de la salud que atendieron en la Zona Cero a las víctimas de los atentados contra las Torres Gemelas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2011.

Un ejemplo del movimiento por el acceso a la salud lo encontramos en el Movimiento para la Salud de los Pueblos (PHM) –y su consigna ‘Salud para todos y todas’–, una red transnacional de actores sociales que luchan por el derecho a la atención de la salud y para politizar los debates sobre los determinantes sociales (es decir, agua potable, seguridad alimentaria, etcétera). Con su campaña global

por el derecho a la atención de la salud, la red persigue documentar violaciones de derechos en materia de salud, evaluar el derecho a la atención de la salud en distintos países, y hacer campaña por el cumplimiento del derecho a la salud desde el ámbito nacional al mundial. Este movimiento, basado en derechos y organizado de abajo arriba, aborda el actual entorno de formulación de políticas que está enmarcado por la globalización económica e ideológica.

### *Movimientos sociales en el sector de la electricidad*

Como ya se ha señalado, dado que el sector eléctrico se presta menos a un discurso basado en derechos, parece haber menos luchas de movimientos sociales en torno a la electricidad que en los dos otros sectores ya presentados. Y teniendo en cuenta que la electricidad se suele percibir como una ‘mercancía’, las luchas de los movimientos sociales en este ámbito tienden a ser de carácter fundamentalmente local y se dirigen, por lo general, contra formas punitivas de neoliberalismo, como bien ilustran dos casos bien conocidos de movilización popular en el sector eléctrico: Arequipa, en Perú, y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Como apunta Arce (2008), las protestas en la ciudad peruana de Arequipa contra la concesión de dos compañías eléctricas de propiedad estatal, Egasa y Egesur, a una compañía belga por parte del Gobierno de Alejandro Toledo en 2002 es un ejemplo de respuesta social masiva a medidas de reforma neoliberales. Al igual que en la ‘guerra del agua’ de Cochabamba, Bolivia, en 2000, “la protesta se vio alimentada por la convicción de que el crecimiento económico y el aumento de la prosperidad no habían beneficiado a las capas más pobres de la sociedad” (Biekart 2005, 87). El Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), que aglutinó a sindicatos, organizaciones populares, sindicatos del transporte, trabajadores agrícolas y partidos políticos de izquierda, encabezó una serie de protestas que consiguieron bloquear la venta de las empresas. Dos personas perdieron la vida en las jornadas de levantamiento popular que se dieron a llamar ‘arequipazo’.

En Sudáfrica, los habitantes de muchas ciudades han tomado cartas en el asunto y se han vuelto a conectar a los servicios eléctricos desmantelando contadores de prepago y/o accediendo ‘ilegalmente’ a la red eléctrica (Ruiters 2007, McDonald 2009). Articulado en el marco del Foro Antiprivatización (APF), este movimiento comunitario representa un desafío radical al ‘neoliberalismo disciplinario’ y pone de manifiesto la eficacia de las tácticas de la acción directa, a juzgar por las muchas concesiones que han logrado alcanzar (como una asignación básica gratuita de electricidad de 50kWh por hogar y por mes).

El relativo silencio sobre las luchas de movimientos sociales en el sector eléctrico en comparación con el agua y la salud, sin embargo, podría también estar relacionado con el hecho de que éstas han tendido a estar encabezadas por sindicatos y no por organizaciones de la ‘sociedad civil’. Como señala Hall (2010, 192), “la mayoría de las campañas [contra la privatización en el sector eléctrico] han estado lideradas por sindicatos”. Trabajadores del sector eléctrico de todo el mundo se han opuesto a la privatización, muchas veces en coaliciones, junto

con partidos políticos, grupos ecologistas, organizaciones comunitarias grupos de consumidores, “basándose en el evidente interés económico de los trabajadores cuyos empleos y condiciones laborales se ven amenazados, pero los sindicatos han hecho campaña, por lo general, sobre cuestiones más generales de interés público, como los precios y la rendición de cuentas”. En comparación con el sector eléctrico, los sindicatos en los sectores del agua y la salud han establecido fuertes coaliciones con otro tipo de actores, como ONG y organizaciones comunitarias, actuando en ellas como organización principal.

### **De la coalición a la alternativa**

#### *Las organizaciones de movimientos sociales y la construcción de coaliciones*

Las organizaciones de movimientos sociales (OMS) son organizaciones formales que no involucran necesariamente a la mayoría de participantes de los movimientos sociales pero que preparan el terreno para ‘episodios de disensión’, como protestas y campañas. La distinción entre movimientos sociales y OMS se basa en la observación de que, a medida que las organizaciones crecen y se convierten en estructuras formalizadas, también tienden a hacerse más burocráticas y conservadoras (Zald y Ash 1966). En los sectores del agua, la electricidad y la salud contemporáneos en el Sur Global, las OMS más importantes representan a los productores y a los usuarios de estos servicios: sindicatos, organizaciones comunitarias y ONG. Teniendo en cuenta que en estas organizaciones participan muchos y muy diversos grupos, no es de extrañar que entre ellos surjan tensiones, aunque también sinergias.

Los sindicatos del sector público han sido uno de los objetivos de ataque favoritos de la reforma neoliberal. Los Gobiernos enfrentados a presiones fiscales han intentado debilitar o destruir el poder de negociación de los sindicatos para recortar los salarios y beneficios de los trabajadores argumentando que estos ‘trabajadores privilegiados’ cobran demasiado en comparación con el resto de la población. Los sindicatos que representan a los trabajadores que proporcionan servicios de agua, salud y electricidad no han sido ninguna excepción a esta regla (Hall 2005). De hecho, en el Sur Global, los sindicatos del sector público se encuentran en una situación política especialmente difícil en mercados laborales muy segmentados, en que la mayoría de la población activa tiene un empleo informal. En este contexto, los trabajadores de los servicios públicos suelen ser vistos por otros miembros de la sociedad –incluso por sus aliados– como una ‘aristocracia obrera’ privilegiada. En tales circunstancias, cumplir con los derechos de los ciudadanos a servicios asequibles y los derechos de los trabajadores a salarios, prestaciones y condiciones laborales dignos en las empresas públicas se convierte en un acto de equilibrio político que supone todo un desafío (Spronk 2010). Por estos motivos, la movilización política conjunta entre sindicatos y organizaciones comunitarias, que suele denominarse ‘sindicalismo de movimiento social’, se ha presentado como un camino a seguir para el movimiento obrero organizado en una economía mundial neoliberal (Moody 1997).

Los sindicatos han estado al frente de coaliciones para defender empresas de agua y electricidad contra la privatización en Uruguay y Perú, con el apoyo de organizaciones internacionales que han proporcionado unos recursos fundamentales a la dirigencia sindical (Novelli 2004, Taks 2008, Spronk 2009). En una exitosa campaña para impedir la privatización parcial del sistema público de atención de la salud en El Salvador, las organizaciones de los trabajadores de la salud fueron las que encabezaron una coalición que, junto con organizaciones de campesinos y ONG, sacaron a 20.000 personas a las calles de El Salvador para una masiva marcha popular por la salud pública en 1999 (Almeida 2006). Sin embargo, como se comenta más adelante, en muchas situaciones en que los sindicatos han tenido alianzas históricas con los partidos políticos en el Gobierno, han colaborado con procesos de privatización para mantener sus empleos y beneficios, como bien se ha documentado en varios casos en América Latina e India (Murillo 2001, Uba 2008). Puede que no se sepa demasiado, por ejemplo, que en el caso de la ‘guerra del agua’ de 2000 en la ciudad boliviana de Cochabamba –un ejemplo muy citado de sindicalismo de movimiento social– el sindicato de los trabajadores públicos del agua destacó por su ausencia y fueron los trabajadores de la manufactura local los que desempeñaron un papel protagonista (Spronk 2009).

Si los sindicatos son vistos como la bestia negra que impide la reforma de los servicios públicos, las organizaciones de la sociedad civil como las ONG y las organizaciones comunitarias son vistas muchas veces como la causa célebre (véase, por ejemplo, World Bank 2004). Para los ideólogos neoliberales, las ONG se conciben como organizaciones impulsadas por valores comunes más que por la búsqueda de poder económico o político y, por lo tanto, son organizaciones privadas con una ética ‘pública’ que son más capaces que el Estado o que el mercado para fomentar un desarrollo centrado en las personas (Cernea 1988). Esta visión idealista de las ONG ignora, no obstante, dos de los principales problemas a los que se enfrentan estas organizaciones. En primer lugar, afirman hablar a favor de ‘los pobres’, pero carecen de mecanismos formales de rendición de cuentas ante cualquier grupo que no sea el de sus donantes (Hulme y Edwards 1997). En segundo lugar, en el contexto de la reducción del Estado, su personal suele estar compuesto por profesionales de clase media que tienen poco en común con el público al que dicen servir y representar (Pfeiffer 2004). Como sugiere el título de un libro publicado por INCITE!, un colectivo de mujeres de color contra la violencia, sobre el ‘complejo industrial no lucrativo’, “La revolución no será financiada” (2007).

Sin embargo, es importante no medir a todas las ONG por el mismo rasero. Muchas son organizaciones militantes que desempeñan un papel fundamental como facilitadoras y mediadoras en luchas de movimientos sociales, proporcionando investigaciones, conocimientos y liderazgo en redes de movimientos sociales (Baud y Rutten 2005). Como bien atestiguan los muchos ejemplos que aparecen en este libro, las ONG también han tenido un papel fundamental a la hora de definir y apoyar la puesta en práctica de alternativas a la privatización. Hay además ONG ambientalistas y centros de estudios de políticas que desem-

peñan un papel de vital importancia en la definición de alternativas para el sector energético (por ejemplo, International Rivers). La intervención de ONG internacionales en el campo de las políticas de salud ha conseguido en muchos casos garantizar el acceso a fármacos antirretrovirales para aquellas personas que viven con el VIH/SIDA (Nelson y Dorsey 2007). La intervención de ONG internacionales también fue crucial en 2005 para presionar a la multinacional Bechtel y lograr que abandonara su polémico pleito contra el Estado boliviano porque éste rescindió en 2005 el contrato de concesión del servicio de agua a raíz de la ‘guerra del agua’ (Spronk y Crespo Flores 2008).

Las organizaciones comunitarias, a diferencia de las ONG, son ‘organizaciones de masas’ que suelen ser más representativas de los sectores que representan. El notable papel positivo de muchas organizaciones comunitarias en la prestación de servicios de salud, sobre todo con su intervención en ámbitos culturalmente sensibles de la prestación como el tratamiento y la prevención del VIH/SIDA, está especialmente bien documentado (véase, entre otros, Chillag et al 2002). La ventaja que tienen las organizaciones comunitarias desde el punto de vista de su (potencial) representatividad y su sensibilidad al contexto local no significa, sin embargo, que no se enfrenten a los mismos problemas que las ONG, ya que éstas también están integradas en estructuras locales de poder. Un estudio de caso sobre las relaciones entre ONG, organizaciones comunitarias y el Estado en varias iniciativas para reducir la pobreza urbana y mejorar el suministro de servicios en tres ciudades de India llega a la conclusión de que “en lugar de ser vehículos de empoderamiento y cambio, las organizaciones comunitarias y sus dirigentes impiden a menudo el avance, controlando o captando los beneficios destinados a los pobres y malversándolos para intereses (políticos) privados (de Wit y Berner 2009, 927). En efecto, romper con la lógica clientelista exige a menudo que las organizaciones comunitarias formen parte de un movimiento social más amplio que esté involucrado en acciones militantes y directas. Tal como demuestra la obra clásica de Piven y Cloward (1977) sobre los ‘movimientos de los pobres’, el disturbio ha sido históricamente la táctica más eficaz para obtener concesiones de las autoridades estatales, especialmente porque ‘los pobres’ son muy numerosos.

Puede que sea necesario crear coaliciones entre sindicatos, ONG y organizaciones comunitarias para aglutinar las grandes protestas que han conseguido presionar a los Gobiernos para dar marcha atrás en las privatizaciones (Olivera y Lewis 2004, Almeida 2006), pero ésta no es siempre una tarea sencilla. Un buen ejemplo de ello es la relación entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Sudáfrica (SAMWU) y el Foro Antiprivatización (APF) en Sudáfrica. Aquí, el sindicalismo de movimiento social nació en el contexto del *apartheid*, cuando los sindicatos eran organizaciones independientes y combativas enfrentadas a las estructuras del Estado del *apartheid*. A principios de los años noventa, el SAMWU adoptó una postura contraria a la privatización, entendiendo que, como trabajadores del sector público, estaban atrapados en un “cepo de trabajador-productor”, ya que “los miembros del SAMWU no son sólo trabajadores cuya seguridad y

condiciones laborales se ven atacadas, sino también miembros de la comunidad amenazados por los cortes de servicio y un mal suministro” (Lier y Stokke 2006, 813). En noviembre de 2002, el SAMWU convocó una huelga indefinida en solidaridad con el APF, pero como explica Barchiesi (2007), sus objetivos se tambalearon muy pronto debido a la postura complaciente de la confederación de sindicatos a la que pertenecía, el Congreso Sindical Sudafricano (COSATU), que había renovado su lealtad al CNA durante las elecciones que iban a tener lugar el mes siguiente. Cuando llegó el momento decisivo, la postura rebelde del sindicato local se vio comprometida por su adhesión a la central de trabajadores, independientemente del apoyo de las bases del SAMWU al APF.

### *El impacto de los movimientos sociales en alternativas del sector público*

Hasta aquí, hemos visto que los movimientos sociales y sus organizaciones han sido actores fundamentales en la lucha para defender alternativas del sector público. Durante el período neoliberal, las campañas de los movimientos sociales han tendido a ser esencialmente ‘reactivas’, centradas en proteger sistemas existentes de lo que se percibe como una amenaza, más que a actuar de forma proactiva (es decir, proponer nuevas alternativas que busquen superar lo que se considera que son problemas con los viejos sistemas). A pesar de ello, en la última década, a medida que el modelo neoliberal ha ido cayendo en un creciente descrédito, los movimientos sociales han potenciado sus victorias abriendo un diálogo público sobre alternativas y presentando demandas políticas a favor de éstas.

Teniendo en cuenta las victorias de los movimientos sociales contra la privatización en el sector del agua, es en este ámbito donde suelen estar más avanzados los debates sobre alternativas. Si bien sus redes internacionales al principio se centraban fundamentalmente en la defensa contra la privatización y la comercialización, durante la última década han dado un salto cualitativo notable proponiendo un marco positivo y constructivo para alternativas públicas de agua (Terhorst 2009). En palabras de un representante de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) durante un taller sobre el agua celebrado en el Foro Social Mundial que tuvo lugar en 2005 en Porto Alegre: “Estamos ganando el debate de la privatización; ¿y ahora qué?”, recordando a los participantes que los movimientos a favor de unos ‘servicios públicos para todos y todas’ se enfrentan al reto de proponer alternativas a raíz de sus propios logros en la derrota de la agenda privatizadora.

El discurso actual sobre alternativas asume este reto y aboga por la protección, la rehabilitación y la promoción de la gestión del agua pública y comunitaria. Hoy en día, los movimientos por el agua persiguen la reactivación y democratización de la gestión del agua pública y comunitaria no comercializada que sean adecuadas a sus contextos locales políticos, socio-económicos y político-ecológicos (International Forum on the Defense of Water 2006). Dadas las diferencias entre los movimientos, algunos de los cuales exhiben una fuerte crítica antisistémica del capitalismo y la democracia liberal mientras que otros aspiran a introducir mejoras en el sistema existente, no es de extrañar que existan tensiones políticas

y conceptuales si resolver con respecto a qué supone exactamente una alternativa conveniente. Por ejemplo, hay todo un debate sobre si los movimientos sociales deberían fomentar el derecho humano al agua o respaldar la idea del agua como elemento del patrimonio común, ya que se teme que el primero de ellos pueda servir a los intereses de las grandes empresas mientras que, el segundo, presenta una alternativa sistémica a las relaciones sociales de propiedad del capitalismo (Bakker 2007). Sin embargo, las distintas tendencias políticas dentro del movimiento comparten un objetivo común de universalizar los servicios, afirmando que la democratización de las instituciones dependerá de la intervención eficaz de los movimientos sociales en todos los niveles, del local al global. Teniendo en cuenta que los sistemas de agua están integrados en las relaciones más generales de producción y reproducción, y se topan con barreras sistémicas al cambio, aclarar el quién, el cómo y el qué de las alternativas plantea un tremendo desafío a los movimientos sociales. En el contexto declive del neoliberalismo, la misión política estratégica de los movimientos sociales hoy en día consiste en ampliar sus organizaciones y repertorios de forma que éstas se puedan convertir en organizaciones proactivas y constructivas –manteniendo a la vez su postura de resistencia– que impulsen la reforma de los sistemas de servicios públicos basándose en la propiedad colectiva y la democracia popular.

Las luchas a favor de la reforma en el sector del agua en Perú, Bolivia y Uruguay, y la campaña de acción por el tratamiento para incrementar el acceso a fármacos antirretrovirales en Sudáfrica, ilustran este punto. Las luchas por el agua en la capital regional de Huancayo, en Perú, que comenzaron en 2003 demuestran cómo las coaliciones de movimientos, que en un primer momento representan una reacción defensiva ante la privatización, pueden desarrollar estrategias de movimiento proactivas dirigidas hacia alternativas públicas. El Frente Regional de Defensa del Agua y de la Vida en Huancayo es una “profunda coalición” entre ciudadanos, usuarios y sociedad civil organizada, como propietarios de puestos en el mercado, pensionistas, organizaciones de bienestar social, comités de barrio y el sindicato de trabajadores de la empresa de agua (Tattersall 2005, Spronk 2009). En 2005, el Frente consiguió bloquear un plan para privatizar la empresa municipal de agua, SEDAM Huancayo. Demostrando lo cruciales que son las alternativas para las estrategias de los movimientos, la privatización quedó totalmente cancelada en 2006, sólo después de que una serie de seminarios populares desarrollara, socializara y politizara un plan alternativo de gestión para modernizar la empresa local sin privatizarla ni comercializarla (Terhorst 2008).

En otro ejemplo, la creación de la coalición uruguaya Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), integrada por el sindicato de trabajadores del agua de la empresa pública y por ONG de derechos humanos y ambientalistas, que promovió una fructífera campaña por un referéndum nacional en 2004, comenzó inicialmente como una modesta respuesta cívica y sindical a una serie de planes para desarrollar un tratamiento de aguas residuales muy perjudicial para el medio ambiente y seguir privatizando partes de la compañía nacional, Obras



Sanitarias del Estado (OSE). A partir de la movilización social en un departamento del país, al principio muy localizada y limitada, se desarrolló una campaña de referéndum nacional formada por una amplia coalición de fuerzas sociales que aglutinó a una diversidad impresionante de actores sociales para desarrollar una propuesta para una profunda reforma constitucional que contemplaba varios cambios significativos, como el reconocimiento del derecho humano al agua, el control público directo, la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos y fases de la gestión de los recursos de agua, y un enfoque respetuoso con los ecosistemas.

La Campaña de Acción por el Tratamiento (TAC) en Sudáfrica es otro ejemplo de cómo las organizaciones de movimientos no sólo desarrollan estrategias de resistencia, sino que también intervienen en el sector con propuestas normativas e institucionales constructivas. La TAC, iniciada en 1998, trabaja por los derechos de las personas que viven con el VIH/SIDA en barrios marginales urbanos y zonas rurales. La campaña empezó participando en labores de suministro de servicios y de incidencia política a favor de un acceso más barato a fármacos antirretrovirales en Sudáfrica. En 2001, la TAC creó un comité de investigación y organizó seminarios y conferencias par desarrollar una propuesta y una campaña para un ‘plan nacional de tratamiento’. Tras ganar un caso en el Tribunal constitucional a favor de los derechos socio-económicos de las personas que viven con VIH/SIDA, la TAC presionó al Gobierno a través de canales formales e informales para hacer efectiva una reducción en el precio de los fármacos antirretrovirales en 2003 (Makino 2009). La TAC es una importante fuente de innovación cultural en el sector de la salud en Sudáfrica, que pone de manifiesto que hay nuevas formas organizativas, valores y prácticas que “se imbuyen en las estructuras sociales a través de la contestación política” (Rao et al 2000, 275).

Estos tres ejemplos demuestran cómo los movimientos persiguen estratégicamente la transformación de los servicios públicos mediante la transformación radical de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo, influyendo así en la ecología y la economía políticas de estos aparatos estatales económicos. Pero como señala Bond (2005, 353) en el caso del contexto sudafricano, “el reto está (...) como siempre, en establecer la diferencia entre ‘reformas reformistas’, por un lado, y reformas que plantean una agenda ‘no reformista’, por el otro, dando lugar al control democrático de la reproducción social, de los mercados financieros y, en última instancia, de la producción en sí”.

No obstante, una vez se desmontan las barricadas y se ha ganado la lucha defensiva, resulta difícil mantener la energía social necesaria para desplazar el equilibrio de poder que se requeriría para crear verdaderas alternativas ‘no reformistas’. Éste ha sido el caso en Bolivia y Uruguay. La lucha por las alternativas comenzó en Cochabamba, Bolivia, en 1999, cuando la población reivindicó que se redujeran las tarifas y la poderosa asociación de regantes, que se modificara la ley proprivatizadora del Gobierno. Cuando el Gobierno boliviano finalmente cedió, anulando el contrato de privatización y modificando la ley nacional sobre el agua, el ciclo de lucha ya se había expandido hasta transformarse en un movimiento por

la reapropiación de la empresa municipal bajo el estandarte de la participación, la transparencia y el control social. Estas demandas convirtieron a las propias organizaciones de movimientos sociales en agentes de cambio dentro de la junta de la empresa, ya que obtuvieron dos de los cinco asientos en la junta provisional de la empresa, pero lo más destacable es que el actor más poderoso en la coalición —la asociación de regantes— pasó a ocuparse de otros proyectos de mayor relevancia para sus intereses inmediatos. En los años que siguieron, los activistas sociales que se quedaron desarrollaron propuestas y pusieron en marcha mecanismos de control social y participación popular en la empresa pública de agua y saneamiento, SEMAPA. Sin embargo, estos cambios impulsados por los movimientos no lograron el resultado esperado de conseguir una empresa pública que funcionara bien (Sánchez Gómez y Terhorst 2005, Spronk 2008). El hecho de que el SEMAPA siga siendo hoy en día una empresa que rinde poco y está mal gobernada pone de relieve las dificultades que entraña para las organizaciones de movimientos sociales convertirse ellas mismas en agentes a largo plazo por el cambio en el sector, especialmente si no se produce una transformación de las relaciones de poder que caracterizan a toda esfera política local.

En comparación con el caso boliviano, la campaña por la reforma institucional en Uruguay fue exitosa, pero sólo de forma limitada. Según la Constitución, los servicios y recursos de agua deben ahora gobernarse, por ley, mediante un organismo público específico y centralizado que debe garantizar la participación de ciudadanos y trabajadores. En consecuencia, el Gobierno creó la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA) y su Comisión Asesora en Agua y Saneamiento (COASAS) en 2007. Estas instituciones, no obstante, no representaban las profundas reformas que el movimiento había exigido y esperado del Gobierno de centro izquierda que fue elegido en 2005. En lugar de ello, representaban un paso centralista por parte del Estado en el desarrollo del sector que fue duramente criticado en su momento por no mostrar ningún cambio radical y por excluir a la CNDAV del proceso parlamentario para la de toma de decisiones (Santos y Valdomir 2005).

Por otro lado más positivo, la consagración institucional del derecho humano al agua ha influido en las negociaciones internacionales de Uruguay, alterando a los organismos de los neoliberales Foros Mundiales del Agua. Además, la mejora de la gestión del sector público se ha convertido en una prioridad política y ha involucrado a los miembros del movimiento en una participación formal e información, especialmente al sindicato FFOSE. Por insistencia de FFOSE, la empresa pública de agua y saneamiento, Obras Sanitarias del Estado (OSE), ha creado una oficina social para aplicar, entre otras cosas, una política de tarifa social y ha desarrollado una estrategia de solidaridad internacional para respaldar a otros operadores públicos de agua en la región (Terhorst 2009). OSE es también uno de los principales organizadores de un foro de empresas regionales previsto para 2010 que persigue crear una red regional de empresas públicas no comercializadas a través del fomento de partenariados público-públicos. Estos cambios institu-

cionales en OSE y en el sindicato habrían sido inconcebibles si no hubiera sido por la intervención constructiva de los movimientos sociales que comenzó –y, sobre todo, no acabó– con la campaña por el referéndum. La CNDAV también se dibuja como un ejemplo excepcionalmente positivo de cómo las coaliciones de movimientos pueden implicar un sindicalismo de movimiento social, generar capital social, crear recursos y aprovechar las oportunidades políticas. El ejemplo de la CNDAV en Uruguay confirma el argumento de Diani (1997, 129) de que “la solidez de los vínculos en el sector del movimiento, así como –de forma más crucial– de los lazos entre los actores del movimiento, el entorno social en que operan y las elites culturales y políticas” incrementan la influencia y el impacto de los movimientos sociales sobre la reforma de las instituciones públicas.

Estos dos casos ilustran que para los movimientos es más fácil generar resultados de procedimiento que poner en práctica cambios sustanciales. Es decir, que es relativamente sencillo crear nuevos canales de participación que incluyan a actores de movimientos sociales, pero que aplicar realmente las decisiones que éstos generan es ya otra cuestión. Además, es más probable que los movimientos sociales tengan éxito con una campaña para impedir un ‘mal público’, evitando, por ejemplo, un proceso de privatización, que con la creación de resultados significativos que propicien un nuevo ‘bien público’, como sería, por ejemplo, la reforma de una empresa con un mal rendimiento. Según Kriesi (2004), para alcanzar ese resultado positivo sustancial, es necesario que el Estado tenga la capacidad y la voluntad política para poner en marcha las demandas de los movimientos. Mientras que rescindir un contrato de privatización no exige demasiados recursos estatales –aparte de los altos costos financieros que puede entrañar la anulación de un contrato–, aplicar una senda de desarrollo alternativa sí los supone. Por ejemplo, aunque la campaña TAC ganó el caso en el Tribunal Constitucional de Sudáfrica y consiguió ejercer una eficaz presión formal e informal sobre el Ministerio de Sanidad, que se tradujo en una decisión normativa para un plan de acceso a fármacos antirretrovirales para las personas que viven con el VIH/SIDA (Makino 2009), la verdadera aplicación de esa decisión normativa dependía de la capacidad, la voluntad política y los recursos del Estado. En el ámbito de la aplicación de políticas, sin embargo, los movimientos sociales tienen un poder de influencia limitado, ya que los cambios jurídicos e institucionales son procesos que pueden tardar décadas y son poco susceptibles a la influencia de los movimientos sociales (Soule y King 2006). Aunque la TAC se convirtió en un actor reconocido, con acceso a la toma formal de decisiones normativas en los organismos de salud correspondientes en Sudáfrica, también mantuvo su postura antagónica utilizando tácticas de acción directa para hacer frente al Ministerio de Sanidad (Makino 2009) y compensar así cierta falta de capacidad estratégica dentro del proceso de aplicación de políticas.

Además de estas limitaciones a las que se enfrentan los movimientos cuando pasan de reformas de procedimiento a reformas sustanciales, y de una postura defensiva a otra proactiva, el poder innovador de los movimientos sociales radica

especialmente en la difusión de repertorios. Un ejemplo de ello estaría en las redes del movimiento por el agua que divulgan y establecen partenariados público-públicos (PUP). Los movimientos por el agua – especialmente los sindicatos, aunque también algunas ONG internacionales– han desarrollado este mecanismo basándose en las prácticas ya existentes en el campo de la gestión del agua, como el hermanamiento de proyectos en el Mar Báltico, y han politizado y cargado estos descuidados instrumentos de intercambio con un significado normativo y un empuje político renovados (Hall et al 2009). En los últimos años, se han desarrollado varios PUP ‘desde abajo’ por iniciativa de sindicatos y organizaciones locales de movimientos sociales (véase el capítulo 15, dedicado al sector del agua en América Latina). Los PUP han sido facilitados a través de las redes de la confederación sindical Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Red Vida y la red internacional Reclaiming Public Water. La empresa uruguaya OSE, por ejemplo, firmó en mayo de 2010 un preacuerdo de PUP con la empresa municipal SEDA CUSCO, en Perú. Estos PUP, impulsados desde abajo, son una muestra de cómo los movimientos por el agua generan propuestas novedosas para la gestión del agua mediante su participación politizada en decisiones normativas y administrativas concretas. También demuestran que un cambio en las normas –dirigido hacia el fortalecimiento igualitario y no lucrativo del sector público– puede dar lugar a nuevas formas de interacción entre movimientos sociales, administradores y trabajadores.

## **Conclusión**

Bevington (2005) resalta la importancia de que la academia priorice la relevancia de la investigación para los propios movimientos sociales y sostiene que, para ello, es necesario alejarse de los cismas teóricos que se limitan a hacer hincapié en distintas variables en lugar de entender los movimientos sociales de forma integral. Por consiguiente, hemos desarrollado una explicación de los distintos rasgos, papeles e impactos de los movimientos sociales que persiguen alternativas a la ‘acumulación por desposesión’ en los sectores de la salud, el agua y la electricidad, y que evita el cisma entre ‘viejos’ y ‘nuevos’ movimientos sociales, de escasa relevancia para analizar las luchas por servicios básicos en el Sur Global.

Durante el período neoliberal, la actividad de los movimientos sociales en los sectores de la salud, el agua y la electricidad ha sido de carácter fundamentalmente defensivo, centrada en impedir o revertir la privatización de servicios estatales. Después de haber ganado campañas en contra de esta agenda empresarial, los dirigentes de movimientos sociales se enfrentan a la cuestión de ‘¿y ahora, qué? y, por ese motivo, han ido dirigiendo cada vez más la atención hacia propuestas para solucionar lo que se entiende como los puntos débiles de las formas de gestión público-estatales y comunales. Estas tareas conllevan la elaboración de un nuevo conjunto de criterios mediante los que definir qué es una alternativa y cómo evaluar su ‘éxito’ (de ahí el énfasis de este libro sobre la metodología de investigación, que se presenta en el capítulo 2).

A pesar de que hay varios casos en que los movimientos sociales han tenido un impacto sobre el suministro de servicios de salud, electricidad y agua, nuestro estudio de los movimientos sociales en estos sectores confirma las conclusiones de otros investigadores en el sentido de que la acción colectiva es menos eficaz para lograr cambios en materia de políticas de lo que se suele creer generalmente (Foweraker 2001, Burstein y Sausner 2005). Aunque la forma organizativa de la coalición ha demostrado ser una manera eficaz para reconstruir la capacidad para la movilización perdida durante las últimas tres décadas de reestructuración neoliberal, para los dirigentes de movimientos sociales ha sido todo un reto mantener la energía social necesaria para pasar de campañas defensivas y centradas en un único tema a la labor, más complicada, de elaborar propuestas de alternativas. En el caso de coaliciones con múltiples actores, la participación de partes interesadas clave —especialmente de los trabajadores del sector público— es vital, como se demuestra con el sentimiento de fracaso de la reforma tras la ‘guerra del agua’ en Cochabamba.

Este estudio también sugiere que, para los movimientos sociales, suele ser más fácil alcanzar resultados de procedimiento que sustanciales, como lo ilustra el caso de la campaña TAC para ampliar el acceso a los fármacos antirretrovirales en Sudáfrica, y que, muchas veces, es necesario ejercer una constante presión sobre el Estado para transformar la política en acción. Por otro lado, dado que la negociación política con las autoridades estatales suele exigir acuerdos de compromiso, las decisiones normativas para realizar reformas radicales propuestas inicialmente por los movimientos sociales se diluyen a menudo en el momento en que el Estado las ejecuta, como sucedió con el referéndum uruguayo sobre el derecho al agua.

Sin embargo, tal como evoca una famosa consigna de los movimientos sociales, “otro mundo no sólo es posible, sino necesario”, la crisis del neoliberalismo —y más recientemente también la crisis financiera mundial— ha creado nuevas oportunidades para mantener un debate público sobre posibles alternativas a unos modelos que han dominado la agenda normativa durante las últimas tres décadas. Al incorporar ideas como transparencia, democracia, participación, igualdad y propiedad colectiva, los movimientos sociales que luchan por ‘servicios para todos y todas’ están realizando una aportación fundamental no sólo a los debates sectoriales sobre la prestación de servicios, sino también a otros debates locales y globales mucho más amplios sobre justicia económica y social.

## Referencias

- Almeida, P.D. 2003. “After the revolution: Gender and democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala”. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* 32(2): 214–215.
- Almeida, P.D. 2006. “Social movement unionism, social movement partyism, and policy outcomes: Health care privatization in El Salvador”, en H. Johnston y P.D. Almeida (eds) *Latin American Social Movements*. Lanham: Rowman and Littlefield.

- Arce, M. 2008. "The repoliticization of collective action after neoliberalism in Peru". *Latin American Politics and Society* 50(3): 37–62.
- Armstrong, E.A. y M. Bernstein. 2008. "Culture, power, and institutions: A multi-institutional politics approach to social movements", *Sociological Theory* 26(1): 74–99.
- Bakker, K. 2007. "The 'commons' versus the 'commodity': Alter-globalization, anti-privatization and the human right to water in the Global South". *Antipode* 39(3): 430–455.
- Balanyá, B., B. Brennan, O. Hoedeman, S. Kishimoto y P. Terhorst. 2005 (eds). *Reclaiming Public Water: Achievements, struggles and visions from around the world*. Amsterdam: Transnational Institute (TNI) y Corporate Europe Observatory (CEO).
- Ballard, R., A. Habib, e I. Valochia. 2006. *Voices of protest: Social movements in post-apartheid South Africa*. Scottsville, South Africa: University of KwaZulu-Natal Press.
- Barchiesi, F. 2006. "Classes, multitudes and the politics of community movements in post-apartheid South Africa", en N. Gibson (ed) *Challenging hegemony: Social movements and the quest for a new humanism in South Africa*. Trenton: Africa World Press.
- Barchiesi, F. 2007. "Privatization and the historical trajectory of 'social movement unionism': A case study of municipal workers in Johannesburg, South Africa", *International Labour and Working-Class History* (71): 50–69.
- Baud, M. y Rutten, R. (eds). 2005. *Popular intellectuals and social movements: Framing protest in Asia, Africa, and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bevington, D. 2005. "Movement-relevant theory: Rethinking social movement scholarship and activism". *Social Movement Studies* 4: 3185–3208.
- Biekart, K. 2005. "Seven theses on Latin American social movements and political change". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 79: 85–94.
- Bond, P. 2005. "Globalisation/commodification or deglobalization/decommodification in urban South Africa. *Policy Studies* 26(3–4): 337–358.
- Brown, P. y S. Zavestoski. 2004. "Social movements in health: An introduction", *Sociology of Health and Illness* 26(6): 697–694.
- Brown, P., S. Zavestoski, S. McCormick, B. Mayer, R. Morello-Frosch y R. Gasior Altman. 2004. "Embodied health movements: New approaches to social movements in health", *Sociology of Health and Illness* 26(1): 50–80.
- Burstein, P. y S. Sausner. 2005. "The incidence and impact of policy-oriented collective action: Competing views", *Sociological Forum* 20: 403–419.
- Canel, E. 1997. "New social movement theory and resource mobilization theory: The need of integration". Ottawa: International Development Research Centre (IDRC).

- Castells, M. 1977. *The urban question: A Marxist approach*. Londres: E. Arnold.
- Cernea, M.M. 1988. *Non-governmental organizations and local development*. Washington, DC: World Bank.
- Chillag, K., K. Bartholow, J. Cordeiro, S. Swanson, J. Patterson, S. Stebbins, C. Woodside, y F. Sy. 2002. "Factors affecting the delivery of HIV/AIDS prevention programmes by community-based organizations", *Aids Education and Prevention* 14(3): 27–37.
- Coetzee, D. 2004. "South Africa's new social movements", en F. Polet (ed.) *Globalizing resistance: The state of struggle*. Londres: Pluto.
- Cook, M.L. 1996. *Organising dissent: Unions, the state, and the democratic teachers' movement in Mexico*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- CSDH [Commission on the Social Determinants of Health]. 2007. "Civil Society Report to the Commission on Social Determinants of Health", *Social Medicine* 2(4): 192–211.
- de Wit, J. y E. Berner. 2009. "Progressive patronage? Municipalities, NGOs, CBOs and the limits to slum dwellers' empowerment", *Development and Change* 40(5): 927–947.
- Diani, M. 1997. "Social movements and social capital: A network perspective on movement outcomes", *Mobilization* 2: 129–147.
- Diani, M. y McAdam, D. 2003. *Social movements and networks: Relational approaches to collective action*. Oxford: Oxford University Press.
- Dugard, J. 2009. "Power to the people? A rights-based analysis of South Africa's electrical services", en D.A. McDonald (ed) *Electric capitalism: Recolonizing Africa on the power grid*. Londres: Earthscan.
- Egan, A. y Wafer, A. 2004. "The Soweto Electricity Crisis Committee", Discussion Paper. Durban: University of KwaZulu-Natal, Centre for Civil Society.
- Esping-Andersen, G. 1990. *The three worlds of welfare capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Foweraker, J. 1995. *Theorizing social movements*. London: Pluto Press.
- Foweraker, J. 2001. *Grassroots movements, political activism and social development in Latin America: A comparison of Chile and Brazil*. Ginebra: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Haber, P.L. 1996. "Identity and political process: Recent trends in the study of Latin American social movements". *Latin American Research Review* 31(1): 171–189.
- Hall, D. 2005. "Electricity privatisation and restructuring in Latin America and the impact on workers". Londres: Public Services International Research Unit (PSIRU).
- Hall, D. 2010. "Struggles against privatization of electricity worldwide", en K. Abramsky (ed) *Sparking a worldwide energy revolution: Social struggles in the transition to a post-petrol world*. Edinburgo: AK Press.
- Hall, D., E. Lobina y R. de la Motte. 2005. "Public resistance to privatisation in water and energy", *Development in Practice* 15(3–4): 286–301.

- Hall, D., E. Lobina, V. Corral, D. Hoedeman, P. Terhorst, M. Pigeon y S. Kishimoto. 2009. "Publicpublic partnerships (PUPs) in water". Londres: Public Services International Research Unit (PSIRU).
- Hamlin, C. 1998. *Public health and social justice in the age of Chadwick: Britain, 1800–1854*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harvey, D. 2003. *The new imperialism*. Oxford y Nueva York: Oxford University Press.
- Hulme, D. y M. Edwards. 1997. *NGOs, states and donors: Too close for comfort?* Nueva York: St Martin's Press.
- Illich, I. 1985. *H2O and the waters of forgetfulness: Reflections on the historicity of "stuff"*. Dallas: Dallas Institute of Humanities and Culture.
- Incite! Women of Colour against Violence. 2007. *The revolution will not be funded: Beyond the non-profit industrial complex*. Cambridge, MA: South End Press.
- International Forum in the Defense of Water. 2006. "Joint declaration of the movements in defense of water". Ottawa: Blue Planet Project.
- Kriesi, H. 1995. "The political opportunity structure of new social movements: Its impact on their motivation", en C. Jenkins y B. Klandermans (eds) *The politics of social protest: Comparative perspectives on states and social movements*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Leys, C. 2001. *Market-driven politics: Neoliberal democracy and the public interest*. Nueva York: Verso.
- Lier, D.C. y K. Stokke. 2006. "Maximum working class unity? Challenges to local social movement unionism in Cape Town", *Antipode* 38(4): 802–824.
- Mainwaring, S. 1987. "Urban popular movements, identity, and democratization in Brazil", *Comparative Political Studies* 20(2): 97–117.
- Makino, K. 2009. "Institutional conditions for social movements to engage in formal politics: The case of AIDS activism in post-apartheid South Africa", en S. Shigetomi y K. Makino (eds) *Protest and social movements in the developing world*. Northampton: Edward Elgar.
- McAdam, D., S.G. Tarrow y C. Tully. 2001. *Dynamics of contention*. Nueva York: Cambridge University Press.
- McDonald, D.A. 2009. *Electric capitalism: Recolonizing Africa on the power grid*. Londres: Earthscan.
- McDonald, D.A. y Ruiters, G. (eds). 2005. *The age of commodity: Water privatization in southern Africa*. London: Earthscan.
- Moody, K. 1997. "Towards an international social-movement unionism", *New Left Review* (225): 52–72.
- Morgan, B. 2006. "Turning off the tap: Urban water service delivery and the social construction of global administrative law", *European Journal of International Law* 17(1): 215–246.
- Murillo, M.V. 2001. *Labour unions, partisan coalitions and market reforms in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.



- Mychalejko, C. 2008. "Ecuador's constitution gives rights to nature", *Upside Down World* <[www.upsidedownworld.org/main/content/view/1494/1](http://www.upsidedownworld.org/main/content/view/1494/1)>, visitado el 29 de junio de 2010.
- Nash, J.C. 1994. "Global integration and subsistence insecurity". *American Anthropologist* 96(1): 7–30.
- Nelson, P. y E. Dorsey, 2007. "New rights advocacy in a global public domain", *European Journal of International Relations* 13(2): 187–216.
- Novelli, M. 2004. "Globalisations, social movement unionism and new internationalisms: The role of strategic learning in the transformation of the Municipal Workers Union of EMCALI", *Globalisation, Societies and Education* 2(2): 161–190.
- Obrinski, J. 2007. "Global health, social movements, and governance", en A.f. Cooper (ed) *Governing global health: Challenge, response, innovation*. Aldershot: Ashgate.
- Olivera, O. 2004. "A political thesis", en O. Olivera y T. Lewis (eds) *Cochabamba! Water War in Bolivia*. Cambridge, MA: South End Press.
- Olivera, O. y T. Lewis (eds). 2004. *Cochabamba! Water War in Bolivia*. Cambridge, MA: South End Press.
- Panitch, L. y C. Leys (eds). 2009. *Socialist Register 2010: Morbid symptoms: Health under capitalism*. Londres: Merlin Press.
- Parliamentary Forum WSF. 2006. "Final declaration of the Sixth World Parliamentary Forum". Caracas: World Social Forum.
- Paulson, S. y P. Bailey. 2003. "Culturally constructed relationships shape sexual and reproductive health in Bolivia", *Culture Health and Sexuality* 5(6): 483–498.
- Pfeiffer, J. 2004. "Civil society, NGOs, and the holy spirit in Mozambique", *Human Organization* 63(3): 359–372.
- Piven, F.F. y R.A. Cloward. 1977. *Poor people's movements: Why they succeed, how they fail*. Nueva York: Pantheon Books.
- Rao, H., C. Morill, y M.N. Zald. 2000. Power plays: "How social movements and collective action create new organizational forms", *Research in Organizational Behaviour* 22: 239–282.
- Ruiters, G. 2007. "Contradictions in municipal services in contemporary South Africa: Disciplinary commodification and self-disconnections", *Critical Social Policy* 27(4): 487–508.
- Sánchez Gómez, L. y P. Terhorst, P. 2005. "Cochabamba, Bolivia: Public-collective partnership after the Water War" en Balanyá, B., B. Brennan, O. Hoedeman, S. Kishimoto y P. Terhorst (eds) *Reclaiming Public Water: Achievements, struggles and visions from around the world*. Amsterdam: Transnational Institute (TNI) y Corporate Europe Observatory (CEO).
- Santos, C. y S. Valdomir. 2005. "Agua, reforma y después: El largo camino hacia una política de aguas". Montevideo: REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.
- Santos, C. y A. Villareal. 2006. "Uruguay: La democracia directa en la defensa del derecho al agua. Movimientos sociales y luchas por el derecho humano al

- agua”, en *América Latina* 34. Bogotá, Colombia: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
- Schonwalder, G. 2004. *Linking civil society and the state: Urban popular movements, the left, and local government in Peru, 1980–1992*. Pittsburgh: Pennsylvania State University Press.
- Soule, S.A. y B.G. King. 2006. “The stages of the policy process and the Equal Rights Amendment, 1972–1982”, *American Journal of Sociology* 111(6): 1871-1909.
- Spronk, S. 2007. “Roots of resistance to urban water privatization in Bolivia: The “new working class”, the crisis of neoliberalism, and public services. *International Labour and Working-Class History* (71): 8–28.
- Spronk, S. 2008. “After the Water Wars in Bolivia: The struggle for a ‘social-public’ alternative”, *Upside Down World* <[www.upsidedownworld.org/main/content/view/1255/31](http://www.upsidedownworld.org/main/content/view/1255/31)>, visitado el 20 de Julio de 2010.
- Spronk, S. 2009. “Water privatization and the prospects for trade union revitalization in the public sector: Case studies from Bolivia and Peru”, *Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society* 14: 164-176.
- Spronk, S. 2010. “Water and sanitation utilities in the global South: Recentering the debate on “efficiency”, *Radical Review of Political Economics* 42(2): 156-174.
- Spronk, S. y C. Crespo Flores. 2008. “Water, national sovereignty and social resistance: Bilateral investment treaties and the struggles against multinational water companies in Cochabamba and El Alto, Bolivia”, *Law, Social Justice and Global Development* 1, disponible en [http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2008\\_1/spronk\\_crespo/spronk.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2008_1/spronk_crespo/spronk.pdf).
- Spronk, S. y J.R. Webber. 2007. “Struggles against accumulation by dispossession in Bolivia – The political economy of natural resource contention”, *Latin American Perspectives* 34(2): 31–47.
- Swyngedouw, E. 2004. *Social power and the urbanisation of water: Flows of power*. Oxford: Oxford University Press.
- Taks, J. 2008. “El agua es de todos/Water for all: Water resources and development in Uruguay”, *Development* 51: 17–22.
- Tattersall, A. 2005. “There is power in coalition: A framework for assessing how and when union-community coalitions are effective and enhance union power”, *Labour and Industry* 16(2): 97–112.
- Terhorst, P. 2008. “Huancayo: From resistance to public-public partnership”, en Balanyá, B., B. Brennan, O. Hoedeman, S. Kishimoto y P. Terhorst. 2005 (eds). *Reclaiming Public Water: Achievements, struggles and visions from around the world*. Amsterdam: Transnational Institute TNI) y Corporate Europe Observatory (CEO).
- Terhorst, P. 2009. “The role of social movements in developing public alternatives in urban water services”, Tesis de Doctorado. Leicestershire: Loughborough University.

- Tilly, C. 1978. *From mobilization to revolution*. Reading: Addison-Wesley.
- Touraine, A. 1969. *La société post-industrielle*. París: Denoël.
- Uba, K. 2008. "Labour union resistance to economic liberalization in India: What can national and state level patterns of protests against privatization tell us?", *Asian Survey* 48(5): 860–884.
- van Schaick, A. 2009. "Bolivia's new constitution. NACLA report on the Americas", NACLA, North American Congress on Latin America <[www.nacla.org/node/5437](http://www.nacla.org/node/5437)>, visitado el 29 de junio de 2010.
- World Bank. 2004. *Making services work for the poor: World Development Report 2004*. Washington, DC: World Bank.
- Zald, M.N. y R. Ash. 1966. "Social movement organizations: Growth, decay and Change", *Social Forces* 44(3): 327–341.
- Zoller, H.M. 2006. "Health activism: Communication theory and action for social Change", *Communication Theory* 15(4): 341–364.